



Perspectivas de investigación

La normativa RISP en los websites de la Administración General del Estado

Silvia Cobo Serrano

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias de la Documentación
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
España · s.cobo@ucm.es

L. Fernando Ramos Simón

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias de la Documentación
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
España · lframoss@ucm.es

Rosario Arquero Avilés

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias de la Documentación
Departamento de Biblioteconomía y Documentación
España · carquero@ucm.es

Resumen: La apertura de datos públicos, proceso iniciado por la Unión Europea en 2003 a partir de una Directiva relativa a la reutilización de la información del sector público -comúnmente conocida como RISP-, permite que los ciudadanos y las empresas dispongan de los activos públicos de información con la intención de que estos puedan ser reutilizados para fines comerciales y no comerciales, lo que además favorece la transparencia política.

La transposición de dicha Directiva europea fue aprobada en España en 2007 y, posteriormente, en 2011 tuvo lugar la publicación de la normativa de desarrollo en la que se establecían los plazos para el cumplimiento de una normativa básica que finalizó en 2013. Tras abordar brevemente el recorrido cronológico de la normativa RISP, los autores pretenden analizar el grado de cumplimiento de dicha normativa en las sedes electrónicas de los organismos de la Administración General del Estado.

Para la consecución de este objetivo, el procedimiento metodológico a seguir corresponde con el método definido cuando, de manera segmentaria, se analizaron las principales páginas Web y sedes electrónicas de los ministerios del Gobierno de España, trabajo científico realizado a finales de 2014 por miembros del grupo de investigación Publidoc-UCM. En términos generales, el procedimiento metodológico respondía a las siguientes etapas: delimitación del criterio para la selección de las instituciones objeto de estudio, análisis de la información electrónica disponible en las sedes electrónicas, identificación de los parámetros de análisis, discusión y presentación de resultados comparativos.

Finalmente, se presentará una *radiografía* de la situación actual del cumplimiento de dicha normativa sobre la reutilización de la información del sector público en los organismos de la Administración General del Estado.

Palabras clave: Reutilización de información pública; Datos abiertos; Administración General del Estado, España.

Abstract: Open data in the public sector is a process which started in 2003 by the European Union. It was formalised through the Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information, which allows citizens and private companies to use public datasets or assets to be

re-used for commercial or non-commercial purposes. Additionally, it will boost Government transparency.

This European Directive was approved in Spain in 2007. Some years later, it was ratified the Royal Decree 1495/2011 which defined the deadline to comply with a basic regulation by 2013. Having explained the public sector re-use laws, this paper aims at analyzing the extent of compliance of these regulations in the General Administration of the State's virtual offices.

In order to get this main objective, a specific methodology was carried out according to the one implemented when Spanish ministries websites as well as virtual offices were analysed in 2014 by some members of Publidoc-UCM research group. In general terms, this methodology was based on selecting the General Administration of the State's bodies, analysing online information available in their virtual offices, discussing and concluding. Finally, an in-depth study is presented on the current compliance of the re-use regulations in the Spanish Governments.

Keywords: Reuse of public sector information, Open Data, General Administration of the State, Spain.

1. La reutilización de la información del sector público: antecedentes y estado actual en Europa y España

En las últimas décadas, la Comisión Europea ha sido el organismo encargado de respaldar el creciente auge de un mercado de información electrónica que ha favorecido la puesta en común de los recursos disponibles en los *websites* de los organismos del sector público de los países miembros, siempre que el uso de los mismos había concluido su ciclo.

Este reto, es decir, el aprovechamiento de los datos públicos (por ejemplo, la información meteorológica o la demográfica), supuso un cambio en las distintas tradiciones de las administraciones públicas y la puesta en común o armonización de los recursos informativos públicos. De esta manera, el acceso a los documentos y/o a los conjuntos de datos permitía la explotación de los mismos para la creación de nuevos servicios o productos. En consecuencia, se puede poner de manifiesto que la reutilización de la información es el resultado de la disposición de la Unión Europea a la apertura de sus activos públicos mediante el uso de las tecnologías de la información e Internet para su puesta a disposición ciudadana. Es decir, «el uso de documentos que obran en poder de organismos del sector público por personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la que se produjeron» (Directiva 2003/98CE, art.2, 4).

Con la intención de alcanzar este reto europeo, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva de reutilización de la información del sector público (RISP), cuya aprobación tuvo lugar a finales de 2003 con la Directiva 2003/98/CE. Dicho instrumento legal tenía como objeto la armonización del acceso a los documentos públicos en todos los organismos de los países miembros de la Unión Europea, el establecimiento de un principio de igualdad y no discriminación en el acceso y uso de la información pública o el establecimiento de un esquema transparente de precios para dicho acceso (Directiva 2003/98CE).

La transposición de la Directiva Europea al territorio español tuvo lugar mediante la aprobación de la Ley 37/2007, cuya tramitación parlamentaria suscitó un escaso debate nacional por el exiguo conocimiento que tanto los políticos como las administraciones públicas y los ciudadanos tenían sobre la materia y las oportunidades que ésta ofrecía.¹

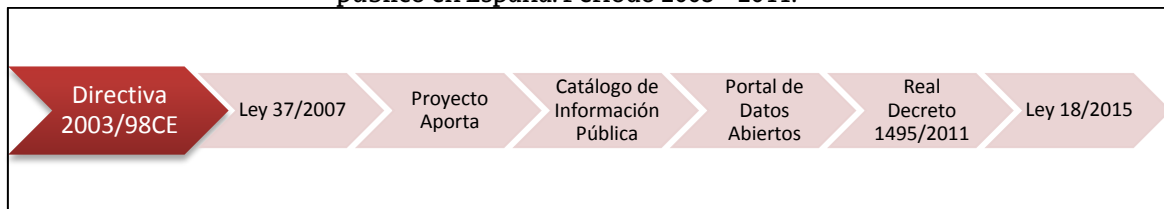
Publicada la Ley española, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI) y la Entidad Pública Empresarial Red.es fueron las instituciones encargadas de la puesta en marcha del *Proyecto Aporta* en el año 2008,

¹ Ley 37/2007 ha sido modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se incorporan los cambios introducidos por la Directiva 2013/37/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, en el régimen de reutilización de documentos del sector público. En este contexto, los cambios más importantes hacen referencia a la ampliación de su aplicación a las bibliotecas, archivos y museos; a favorecer los formatos y la interoperabilidad de la información; a la consagración del principio de costes marginales y al régimen de acuerdos exclusivos en el ámbito de las instituciones culturales.

proyecto desarrollado en colaboración con el antiguo Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, denominado en la actualidad Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Con la intención de situar a España en la vanguardia europea en materia de reutilización de la información pública, el *Proyecto Aporta* acometió varias acciones orientadas a la formación y sensibilización del valor económico de dicha reutilización, tales como la organización de conferencias, la publicación de materiales divulgativos sobre la materia u otras actividades tanto a escala nacional como internacional para alcanzar mayor difusión. Entre las líneas de actuación del *Proyecto Aporta*, destaca notablemente la creación del *Catálogo de Información Pública* del Gobierno de España (Ministerio de Industria, Energía y Turismo/Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2012), cuyos inicios se remontan al año 2010 y que fue sustituido por el actual catálogo de datos del *Portal de Datos Abiertos*, puesto en marcha en 2011 y cuyas actuaciones de mejora revierten en una mejor visibilidad y accesibilidad a la Web, aunque se deben indicar las dificultades encontradas para implicar a los organismos públicos de la administración española en la necesidad de incrementar el número de conjunto de datos y, en segundo lugar, la actualización de los mismos.

Figura 1. Evolución cronológica del desarrollo de la reutilización de la información del sector público en España. Periodo 2003 – 2011.



Si se sigue la evolución cronológica de los acontecimientos en materia de reutilización de la información del sector público, no puede pasar de forma inadvertida la publicación en noviembre de 2011, coincidiendo con la puesta en marcha del ya comentado *Portal de Datos Abiertos* del Gobierno de España, del Real Decreto 1495/2011, por el que se desarrolla la Ley 37/2007.

Como principio general, en dicho Real Decreto se expresa que los organismos públicos «autorizarán la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por ellos e incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto», (art.2), excepto que alguna normativa específica lo impida. En este sentido, la denegación de la reutilización de la información pública tiene lugar si «concorre alguno de los supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre» (Real Decreto 1495/2011); es decir, aquellos documentos cuyo acceso no está permitido por ser de aplicación normativa específica sobre Derecho Administrativo, seguridad del Estado o propiedad intelectual.

Atendiendo a los documentos susceptibles de reutilización, en el artículo 4 del Real Decreto 1495/2011 se indica que los organismos y entidades «informarán de manera estructurada y usable, preferentemente a través de un espacio dedicado de su sede electrónica con la ubicación «sede.gob.es/datosabiertos»» sobre los aspectos que se detallan a continuación, «facilitando al máximo la identificación, búsqueda y recuperación de los documentos» (Real Decreto 1495/2011):

- Los documentos objeto de la reutilización.
- Los formatos en que dichos documentos están disponibles para ser reutilizados.
- Las condiciones aplicables a su reutilización, con indicación de la fecha de última actualización de los mismos.

Asimismo, en el anexo del Real Decreto 1495/2011 se establece la estructura y contenido del aviso legal para la modalidad general de puesta a disposición de los

documentos reutilizables regulada en el apartado 1 del artículo 8 de dicho Real Decreto. Concretamente, se hace alusión a:

Autorización de reutilización y cesión no exclusiva de derechos de propiedad intelectual.

- Condiciones generales para la reutilización.
- Exclusión de responsabilidad.
- Responsabilidad del agente reutilizador.

Otras matizaciones de gran interés recogidas el Real Decreto aluden, por un lado, a la información que los propios organismos del sector público deben comunicar sobre la forma estructurada, los formatos disponibles, las condiciones y la fecha de última actualización de los documentos susceptibles de ser reutilizados. Asimismo, la información sobre los documentos reutilizables estará disponible en su sede Web y se facilitará su búsqueda y recuperación a partir de mecanismos tales como listados, bases de datos o índices. Por otro lado, el Real Decreto 1495/2011 establecía un plazo de adaptación cuya expiración tuvo lugar en mayo de 2013. A partir de esta fecha, todos los organismos públicos afectados por la normativa deben disponer de un plan de medidas de impulso de la reutilización en el que se incluyan «al menos cuatro conjuntos de documentos de alto impacto y valor en un plazo máximo de seis meses desde la finalización del plazo de adaptación previsto» (Real Decreto 1495/2011, Disposición Adicional Segunda).

Coincidentemente con el objeto de la presente investigación, en el Real Decreto 1495/2011 se determinó la publicación de un aviso legal en las páginas Web de los organismos públicos en el que figurasen las condiciones generales para la reutilización de su información. Dichas condiciones, de aplicación a la modalidad general básica no sujeta a condiciones específicas (que es de reutilización aplicable a todos los organismos públicos, por defecto) son las siguientes:

- No desnaturalizar el sentido de la información.
- Citar la fuente de los documentos objeto de la reutilización.
- Mencionar la fecha de la última actualización de los documentos objeto de la reutilización, siempre cuando estuviera incluida en el documento original.
- No se podrá indicar, insinuar o sugerir que los órganos administrativos, organismos o entidades del sector público estatal titulares de la información reutilizada participan, patrocinan o apoyan la reutilización que se lleve a cabo con ella.
- Conservar y no alterar ni suprimir los metadatos sobre la fecha de actualización y las condiciones de reutilización aplicables incluidos, en su caso, en el documento puesto a disposición para su reutilización por la Administración u organismo del sector público.

2. Finalidad y metodología

De acuerdo con lo manifestado anteriormente y centrando la atención en la publicación de un aviso legal en las páginas Web de los organismos públicos en el que figurasen las condiciones generales para la reutilización de su información, en el presente estudio se pretende conocer el grado de cumplimiento de tal publicación en las sedes electrónicas de la Administración General del Estado, concretamente en 97 organismos públicos españoles.

Para lograr tal objetivo, el procedimiento metodológico consistió en la consecución de las siguientes etapas:

- Criterio de selección de las instituciones objeto del presente estudio. Dado el número de organismos públicos, se han seleccionados aquellos que figuran en el directorio de Sedes Electrónicas, disponibles en el portal *administracion.gob.es*. De estos, cabe destacar la presencia del Senado, como alta institución del Estado, y la Agencia Española de Protección de Datos, como

organismo independiente. Otro aspecto reseñable es la exclusión de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) del presente estudio, ya que se trata de una entidad privatizada. Véase el anexo 1 con la relación de organismos.

- Identificación y posterior análisis de la información electrónica ofrecida en las sedes electrónicas de los organismos de la Administración General del Estado seleccionados.
- Identificación de campos de análisis (referencia a la Ley 37/2007, al Real Decreto 1495/2011, disponibilidad de información relativa a las condiciones de reutilización, espacio de datos abiertos,...).
- Análisis de los resultados obtenidos.
- Discusión y presentación de resultados.

3. Resultados de la aplicación del Real Decreto 1495/2011 en la Administración General del Estado y buenas prácticas detectadas.

El análisis presentado en el estudio se ha efectuado tanto en los avisos legales de las sedes electrónicas (espacios virtuales preferentes en el que debe figurar la información relativa a los recursos susceptibles de reutilización (Real Decreto 1495, art. 4, 2011)) de los 97 organismos seleccionados así como en el resto de secciones de la propia sede electrónica, ya que, como se comentará posteriormente, en algunos casos la información relativa a la reutilización de la información del sector público se ha localizado en las secciones *Datos Abiertos*, de las propias Sedes Electrónicas.

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto, en primer lugar, que cada vez más los organismos de la Administración Central del Estado van tomando conciencia de la materia objeto de interés al incluir una referencia explícita sobre la Ley española 37/2007, de reutilización de la información del sector público en sus respectivos avisos legales o secciones de las sedes electrónicas. En este sentido, se observa que en el 40% de los casos casi todos los organismos dependientes de su institución matriz hacen una mención explícita a la misma; es decir, se incluyen en esta categoría el Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, por último, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Véase el gráfico 1 y la tabla 1 donde se totaliza el número de organismos dependientes para cada uno de los entes matrices que incluyen la referencia explícita a dicha ley española.

Gráfico 1. Distribución porcentual de la referencia explícita a la Ley 37/2007, de reutilización de la información del sector público

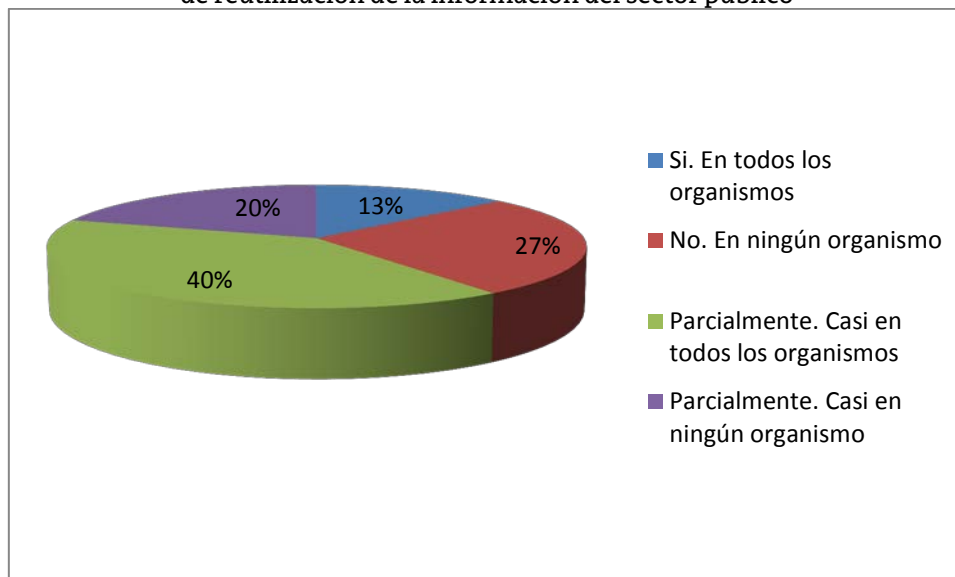


Tabla 1. Distribución numérica y porcentual de los organismos de la Administración General del Estado en los que se menciona explícitamente la Ley 37/2007, de reutilización de la información del sector público.

Organismos de la Administración Central Española	Nº organismos dependientes	%
Ministerio de Economía y Competitividad	18	15
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas	18	15
Ministerio de Justicia	2	1,7
Ministerio de la Presidencia	4	3,3
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad	3	2,5
Ministerio de Empleo y Seguridad Social	3	2,5
TOTAL	48	40

A la luz de los resultados obtenidos, casi el 50% de los organismos de la Administración Central Española se ha hecho eco de la materia, lo que pone de manifiesto que cada vez más las instituciones públicas se van adaptando a la normativa y puesta a disposición de sus conjuntos de datos en la red para su reutilización.

Seguidamente, es notable el alto porcentaje de organismos en los que todavía no se encuentra esta referencia explícita, lo que lleva a pensar en la necesidad de establecer nuevas políticas de difusión sobre la materia entre los diversos entes de la Administración General del Estado y la armonización de la información disponible en los avisos legales sobre la reutilización de información pública. En concreto, es reseñable la falta de información sobre la ley española de 2007 en las sedes electrónicas de todos los organismos analizados en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo así como tampoco en el Senado. En términos cuantitativos, se alcanza un total de 17 organismos.

Finalmente, en posiciones inferiores se encuentran, con un 13%, todos los organismos de instituciones matrices en cuyas sedes electrónicas se hace mención explícita de la Ley 37/2007. A este respecto, únicamente son tres los organismos que presentan la referencia: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Agencia Española de Protección de Datos. Asimismo, se observa cómo en el 20% de los casos casi ningún organismo de su institución matriz se hace eco de la ley española.

Con respecto al segundo parámetro de interés y a diferencia del caso anterior, en esta ocasión es remarcable la falta de referencia a la normativa más actual en materia de reutilización de la información del sector público; es decir, el Real Decreto 1495/2011. De acuerdo con el gráfico 2, únicamente en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social la mención al Real Decreto aparece en la sede electrónica de todos sus organismos dependientes; esto es, el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Sede electrónica de la Seguridad Social. Asimismo, esta mención también está disponible en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos.

En términos cuantitativos, se pueden estimar en casi 11,34% el número de organismos españoles que pueden hacer constar en su avisos legales u otros espacios virtuales de sus respectivas sedes electrónicas la posibilidad de reutilizar la información pública de la que son productores, una vez que ésta ha cumplido su misión de servicio público para que sea reutilizada con o sin fines comerciales. Esta estimación es el resultado de la suma de los organismos dependientes de instituciones matrices que, o bien en todas sus sedes electrónicas aparece la referencia al Real Decreto 1495/2011 o bien esta mención se publica en casi todos los organismos.

Por tanto, a los cuatro organismos mencionados anteriormente (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal, Sede electrónica de la Seguridad Social y Agencia Española de Protección de Datos) hay que añadir el Ministerio de la Presidencia, la Subsele del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, la Subsele del Centro de Investigaciones Sociológicas, el Ministerio

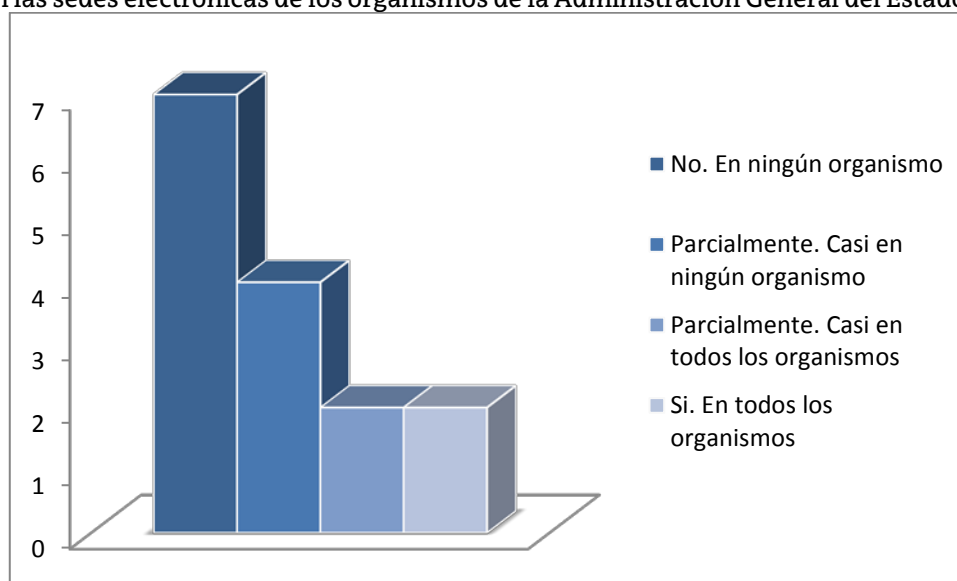
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Gráfico 2. Distribución sobre la referencia explícita al Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal



La falta de incorporación del Real Decreto puede poner de manifiesto el desconocimiento de las instituciones pública sobre la normativa española en vigor, aprobada en 2011 para el caso que nos compete, al igual que la incorporación de las condiciones de reutilización, ya que únicamente han sido publicadas en las sedes electrónicas de todos los organismos dependientes del Ministerio de la Presidencia (3), en la Agencia Española de Protección de Datos (1) y en la mayoría de los organismos dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2) y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2). Véase el gráfico 3.

Gráfico 3. Estado actual de la presencia explícita de las condiciones de reutilización requeridas en las sedes electrónicas de los organismos de la Administración General del Estado



La dificultad de los usuarios para acceder a los recursos de información pública disminuye mediante la utilización de los portales de datos abiertos que forman parte de las sedes electrónicas de aquellos organismos en los que se han habilitado dichos recursos. De esta manera, los recursos de información pública no aparecen de forma dispersa, sino que están centralizados en un único portal. Como bien manifiestan Arquero Avilés y Marco Cuenca (2014) «las políticas europeas en torno a la reutilización de la información pública suponen también un importante empuje para el desarrollo de los portales de datos abiertos» (p. 100).

Ejemplos del estudio de los diversos portales de datos abiertos son los estudios llevados a cabo por Ramos Simón *et al.*, Arquero Avilés y Marco Cuenca y Cobo Serrano. El primero de ellos, pretendía identificar los portales *open data* «puestos en marcha por los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, describir las licencias de acceso y uso de la información pública y analizar las características de los recursos de información desde el punto de vista técnico» (Ramos Simón *et al.*, 2012), mientras que Arquero Avilés y Marco Cuenca (2014) se encargaron, por un lado, del análisis de contenidos, estándares, conjuntos de datos y aplicaciones del portal de datos abiertos de la Unión Europea y, por otro lado, de su evaluación. Finalmente, Cobo Serrano (2015) se encargó del estudio de los portales latinoamericanos de datos abiertos, concretamente de los de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay).

En España, como medida de buenas prácticas, se encuentra el catálogo de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En dicho catálogo se proporciona información de los formatos de descarga (CSV, XLS, XLSX, PDF), tamaño del archivo, idioma y fecha de los mismos. Los conjuntos de datos o información reutilizable se encuentran agrupados en las siguientes categorías temáticas: Prestación cese actividad (8 documentos), *Ingresos y gastos por Comunidades Autónomas y provincias* (2 documentos), *Edad de jubilación en el acceso a la prestación* (8 documentos) y *Directorio de Oficinas de la Seguridad Social* (2 documentos).

Otro caso de relevante notoriedad es el catálogo de datos creado en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En este caso, se proporciona una caja de búsqueda por texto libre y otros tres campos desplegables: tema, etiqueta y formatos. Se han cuantificado 23 conjuntos de datos, cuyos formatos de descarga son: CSV, ODF, PDF, RDF, SHP, SPARQL, XML, EXCEL, WMS y JSON. Con respecto a la estructura de los registros para cada uno de los *datasets*, ésta formada por seis grandes bloques: *Descargar datos*, *Descripción*, *Metadatos*, *Publicación de los datos* (incluye como campos específicos: *Fecha de publicación*, *Frecuencia de actualización*, *Idioma*, *Unidad Orgánica de gestión de datos*, *Condiciones de uso*, *Cobertura Geográfica y Cobertura temporal*), *Información adicional*, *Normativa* y la posibilidad de que los usuarios dejen su *opinión*.

En tercer lugar, se puede citar la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuyo catálogo permite la descarga directa del documento en XML, SGML, PD.

Otras observaciones a considerar tras el análisis efectuado ponen de manifiesto la directa vinculación entre los catálogos de datos creados en los respectivos organismos de la Administración Central del Estado y el catálogo de datos del portal *datos.gob.es*, ya que se suelen enlazar los registros objeto de reutilización a su ubicación en el catálogo nacional. Este es el caso de los conjuntos de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Red.es, entre otros.

Otras singularidades son los listados en PDF para su descarga por el reutilizador. La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, la Agencia Española de Protección de Datos o Turespaña son ejemplos de esta tendencia.

Por último, el análisis efectuado en las sedes electrónicas de los 97 organismos seleccionados ha permitido conocer cuáles de estos tienen publicado un plan de medidas de impulso de la reutilización de la información. Concretamente, el 9,18% de la población analizada dispone de este instrumento, lo que pone de manifiesto el desconocimiento y escaso trabajo que desde la propia Administración Central se hace en materia de reutilización de la información. Los organismos que han publicado un

plan de medidas para impulsar la reutilización son: Agencia Española de Protección de Datos, Ciemat, Instituto de Mayores y de Servicios Sociales, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Red.es, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y Turespaña.

4. Conclusiones

Efectuado el análisis para conocer el grado de cumplimiento de la normativa en vigor sobre la reutilización de la información del sector público en las sedes electrónicas de los organismos de la Administración Central del Estado que figuran el directorio del portal *administracion.gob.es*, se puede concluir que es necesario seguir potenciando la reutilización de información en la propia Administración española, ya que se detecta un mínimo avance con respecto a la situación existente en 2011.

Por otro lado, se observa la necesidad de establecer políticas claras y uniformes entre los ministerios y sus respectivos organismos dependientes, ya que si la institución matriz publica las condiciones de reutilización en su sede electrónica y facilita la reutilización de sus conjuntos de datos, resulta aconsejable que sus organismos dependientes también lo hagan.

Finalmente, también se detectan significativas diferencias en los conjuntos de datos o documentos dispuestos para su realización. En este sentido, se recomienda una política de publicación uniforme con la intención de evitar que mientras que unos organismos solo proporcionan un listado de documentos que enlazan a los registros en *datos.gob.es*, otros facilitan campos de búsqueda y registros estructurados.

Referencias

Arquero Avilés, Rosario; Marco Cuenca, Gonzalo (2014). El Portal de datos abiertos de la Unión Europea: análisis y evaluación. *Revista General de Información y Documentación*, 24, 1, 99-118.

Cobo Serrano, Silvia (2015). Los portales latinoamericanos de datos abiertos: nuevas herramientas para el acceso y la reutilización de la información gubernamental. En *La información gubernamental y el acceso a la información pública*. México: UNAM, p. 39-50.

Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público. Diario Oficial de la Unión Europea. [Consultado el 30 de agosto de 2015]. Disponible en web: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:ES:PDF>>

Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Boletín Oficial del Estado. [Consultado el 30 de agosto de 2015]. Disponible en web: <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7731>

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Boletín Oficial del Estado nº 276. [Consultado el 30 de agosto de 2015]. Disponible en web: <<http://www.boe.es/boe/dias/2007/11/17/pdfs/A47160-47165.pdf>>

Ministerio de Industria, Energía y Turismo/Ministerio de Hacienda Y Administraciones Públicas (2012). *Funcionamiento, mantenimiento y actualización del Catálogo de Información Pública datos.gob.es*. 2ª edición electrónica – Versión 20/06/2012. [Consultado el 30 de agosto de 2015]. Disponible en web: <http://datos.gob.es/sites/default/files/PLANCISP_GCI_02.2.3.pdf>

Ramos Simón, L. Fernando et al. (2012). De la reutilización de información del sector público a los portales de datos abiertos en Europa. *BiD: textos universitarios de biblioteconomía i documentació*. 29. [Consultado el 30 de agosto de 2015]. Disponible en web: <<http://www.ub.edu/bid/29/ramos2.htm>>

Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal. Boletín Oficial del Estado nº 269. [Consultado el 30 de

agosto de 2015]. Disponible en web: <http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-17560>

Agradecimientos

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado «Organización del acceso, uso y reutilización de la información del sector público en España. Hacia la consolidación de una industria de la información» (Plan Nacional de I+D. CSO2010-17451), dirigido por el Dr. L. Fernando Ramos Simón (UCM).

Asimismo, nos gustaría agradecer el apoyo y la beca concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (España) en el programa «Formación del Profesorado Universitario».

ANEXO 1

Organismos de las sedes electrónicas de la Administración General del Estado

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Ministerio de Defensa

Ministerio de Defensa
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Biblioteca Nacional de España
Consejo Superior de Deportes
Secretaría de Estado de Cultura
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Ministerio de Economía y Competitividad

Ministerio de Economía y Competitividad
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Instituto de Salud Carlos III
Secretaría de Estado de Comercio
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
Subsede del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC)
Subsede del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)
Subsede del Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Subsede del Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
Subsede del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Sede electrónica de la Seguridad Social

Ministerio de Fomento

Ministerio de Fomento
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Autoridad Portuaria A Coruña
Autoridad Portuaria de Almería
Autoridad Portuaria de Valencia
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Autoridad Portuaria de Alicante
Autoridad Portuaria de Avilés
Autoridad Portuaria de Barcelona
Autoridad Portuaria de Bilbao
Autoridad Portuaria de Castellón
Autoridad Portuaria de Ceuta
Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao
Autoridad Portuaria de Huelva
Autoridad Portuaria de Melilla
Autoridad Portuaria de Motril
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
Autoridad Portuaria de Santander
Autoridad Portuaria de Vigo
Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su Ría
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas
Sede del Punto de Acceso General
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
Dirección General del Catastro

Dirección General de Fondos Comunitarios
 Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas
 Dirección General de Ordenación del Juego
 Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda
 Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)
 Mutualidad de Funcionarios de la Administración del Estado (MUFACE)
 Subse de la Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL)
 Subse de la Comisionado para el Mercado de Tabacos
 Subse de la Dirección General de Tributos
 Subse de la Instituto de Estudios Fiscales
 Subse de la Intervención General de la Administración del Estado
 Subse de la Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
 Subse de los Tribunales Económico-Administrativos

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 Comisión Nacional de Energía (Se integra en la Sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)
 Consejo de Seguridad Nuclear
 Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
 Instituto de Turismo de España (Turespaña)
 Oficina Española de Patentes y Marcas
 Red.es
 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
 Subse de la DG. de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Ministerio del Interior

Ministerio de Interior
 Dirección General de la Policía
 Dirección General de Tráfico
 Dirección General de la Guardia Civil

Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia
 Mutualidad General Judicial

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de la Presidencia
 Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado (BOE)
 Subse de la Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
 Subse de la Centro de Investigaciones Sociológicas

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
 Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

Cortes Generales

Senado

Otros

Agencia Española de Protección de Datos